



El Presidente Marcos votando, el año pasado, en el referéndum sobre su ley marcial.

entre las dos "facciones del partido único", el Nacionalista y el Liberal. Dominada la prensa, cerrado el Parlamento, la oposición no puede ser ya más que armada: se centra, sobre todo, en el NPA, o New Popular Army, comunista de la línea maoísta, del que se dice que tiene unos 10.000 guerrilleros armados y organizados, y más de cien mil simpatizantes. Pero se supone que estas cifras oficiales son sólo una pequeña parte de la realidad.

Los dos compañeros de acusación y de pena de muerte de Benigno Aquino pertenecían, según el Tribunal, a este Ejército Popular. Son Bernabé Buscayno (probable ortografía actual de un Vicalino original) y Víctor Corpuz (Corpus). Buscayno ha sido declarado culpable de subversión y asesinato, y Corpuz, de desertión —fue teniente de policía y se pasó a las guerrillas— y de subversión.

Aquino ha basado su defensa en la inocencia de los hechos que se le imputaban (el asesinato del jefe local de una aldea): "Si Marcos cree realmente que soy culpable, que me maten mañana mismo", ha dicho. Desde un punto de vista jurídico, ha sostenido que el Tribunal es incompetente: los militares no pueden juzgar a un civil. Pero la ley marcial lo permite sin duda, y el general Augusto Syjuco, que presidía el Tribunal de siete militares, ha considerado que el juicio era legal, las pruebas concluyentes y que, por lo tanto, las tres sentencias de muerte eran justas. De todas formas, las condenas de muerte van de oficio al Tribunal Supremo, que será el encargado de referendar o de negar el veredicto. Y aún quedaría la instancia del indulto presidencial.

Es en estos últimos pasos del procedimiento en los que el Presidente Carter puede o desea, tal vez, influir. Está en plena campaña de

derechos humanos, y en estos momentos se está negociando la continuación de las bases de los Estados Unidos de Filipinas. Es una negociación que interesa a las dos partes: a Marcos, por la afluencia de dólares que supone, y a Estados Unidos, por la importancia de las bases, acrecentada después del abandono de Tailandia y del Vietnam. La base naval de Subic Bay es la residencia de la Séptima Flota, y está dotada con el más importante astillero después de Pearl Harbour. La base aérea de Clark es una clave importante en las rutas aéreas hacia el golfo Pérsico y el Oriente Medio. Las negociaciones entabladas ya por Kissinger determinaban por parte de los Estados Unidos una entrega de mil millones de dólares a lo largo de cinco años, a repartir entre ayuda militar y ayuda económica: Marcos pretende los mil millones de dólares exclusivamente en ayuda militar y un acuerdo de unos cien millones de dólares anuales en ayuda económica. Se había acordado, además, una reducción en el tamaño de las bases y una convención por la cual la

bandera filipina ondearía sobre ellas, como muestra de su soberanía y de su jurisdicción sobre ellas.

Pero parece que hay una resistencia en el Congreso de los Estados Unidos a llevar adelante esos acuerdos. Por una parte, el dinero parece mucho, habida cuenta de que a Marcos le interesan principalmente esas bases para la defensa de su país, pero en lo que se está haciendo mayor hincapié es en la cuestión de los "derechos humanos". Se ha dicho en el Congreso que las Filipinas han aprendido democracia y libertades de los Estados Unidos durante medio siglo y que estas libertades han sido arrojadas por la dictadura de Marcos, por el poder personal y por la destrucción de sus enemigos políticos. Las cifras de detenidos políticos oscilan entre varios centenares y varios millares, según las fuentes. Prisioneros que, como el propio Aquino, llevan años de penal sin ningún juicio, y cuando estos juicios se celebran no ofrecen ninguna garantía.

La insistencia de la diplomacia americana sobre el régimen de

Marcos es la de que busque la posibilidad de establecer aunque sea una "democracia limitada", con las fórmulas que se están buscando para los países latinoamericanos: un "régimen de transición", o como se le quiera llamar, que conduzca en ciertos plazos a una elección general y a una elección presidencial. La resistencia de Marcos es, naturalmente, considerable: alega que su país está en estado de guerra por necesidad, tanto por los guerrilleros maoístas como por las sublevaciones musulmanas, y que la democracia sólo traería la anarquía y el caos.

Una de las suposiciones que se hacen a raíz de este consejo de guerra que ha pronunciado tres penas de muerte es la de que están calculadas para ofrecérselas a los Estados Unidos: Marcos dejaría que el Tribunal Supremo las ratificase y después ejercería su derecho personal de gracia como un regalo para la campaña de Carter de los derechos humanos y como una medida de clemencia para que el Congreso de los Estados Unidos considerase factible la operación de las bases.

Hay, sin embargo, otros presagios peores. Marcos estaría convencido de que en cualquier caso los Estados Unidos desean mantener las bases, o les son imprescindibles, y que pagarán su precio, haga lo que haga. Ha dejado incluso correr el rumor de que podría desalojar las bases y entrar en negociaciones con la URSS, en vista de que sus oponentes son maoístas de influencia china (la realidad es que China insta a Estados Unidos a que conserve las bases de Filipinas, por miedo a la influencia soviética, y el Japón también presiona en ese sentido) y que las sentencias de muerte son una prueba de que no se deja influir por ninguna especie de campaña de derechos humanos. La prueba máxima será la ejecución de los tres condenados, aunque el procedimiento de revisión por parte del Tribunal Supremo puede ser todo lo lento que desee, con objeto de mantener a su conveniencia la tensión. ■

## La tragedia de la emigración

### Carmen, 18 años, 5 meses en la cárcel...

**E**l periódico que publica la noticia —"The Observer", Londres— sólo indica el nombre y no el apellido: la española Carmen, de dieciocho años de edad, ha pasado cinco meses en la cárcel de Hollywood porque permaneció en Gran Bretaña más tiempo del que autorizaba su permiso. Le fue impuesta una multa de 25 libras y no pudo pagarla. Carmen explica: "En la cárcel, uno empieza contando los días y después abandona la esperanza. Al principio lloraba; luego comprendí que no iba a adelantar nada. Sólo se nos deja salir de las celdas una hora al día. Después de estar allí, ya sé todo lo malo que se puede hacer. Pero yo nunca hice una de esas cosas, y no puedo comprender por qué me encerraron en la cárcel". Al salir,

le han dado un mes de plazo para que abandone el país.

Más de mil inmigrantes son encarcelados cada año en Londres por problemas similares. El mecanismo es que el juez ante quien se conduce al infractor recomienda su deportación del país, pero la deportación debe decidirla el Ministerio del Interior. El tiempo que media entre la recomendación del juez y la decisión del Ministerio —que no siempre deporta—, el inmigrante lo pasa en la cárcel. En muchos casos pueden pasar varios meses en la cárcel y luego se les permite quedarse. Muchos de los así detenidos se ofrecen a pagar su billete y marcharse del país, pero las autoridades no aceptan: la deportación es a costa del Estado y sólo si la decide el Ministerio.